

HACIA UNA POLITICA POSTCRISIS

David Ibarra
20 de mayo de 2010
El Universal

Desde fines del siglo pasado, la ideología económica predominante ensalzó las virtudes de la desregulación, la privatización, los impuestos bajos e indirectos. Conforme a esa visión, el Estado resultaba innecesario por cuanto el mercado podía hacerlo siempre con mejor eficiencia y con menos corruptelas. Por supuesto, el precio a pagar consistió en detener el proceso de avance de la equidad social de los países.

Sin duda, el librecambismo bien aplicado ayuda a la inversión y al crecimiento. Sin embargo, son la visión y las regulaciones estatales, las que crean a los mercados y fijan los parámetros de su funcionamiento. La lógica mercantil persigue la optimización de los beneficios, sin parar mientes en el bienestar general o siquiera en el imperativo de ensanchar el mercado interno a fin de dar solución de continuidad a las utilidades empresariales. Es tarea indeclinable de los estados, señalar las fronteras entre equidad y eficiencia de la que depende la legitimidad de todo gobierno. El nexo inevitable de asociación entre mercado y política, entre crecimiento y justicia social, está dado por el grado en que las estrategias gubernamentales procuran el bienestar general, la multiplicación de las ocupaciones y ponen límite a los excesos concentradores del mercado.

Los resultados del experimento neoliberal sintetizado en el "Consenso de Washington" están a la vista. Se vive una época de intensa inseguridad, sea económica, política o la asociada a la criminalidad que ponen en entredicho a los gobiernos, independientemente de sus inclinaciones ideológicas. Se aprecian disparidades nunca vistas entre la concentración individual de la riqueza y una pobreza difícil de atemperar que afecta a grandes grupos de la población e incluso causa penurias en las finanzas de muchos gobiernos. Aun así, se gastan enormes sumas en campañas militares en el mundo o en hacer la guerra a la criminalidad al interior de los países, mientras decaen caminos, presas, escuelas o no se financian servicios de salud para todos. El desempleo y el subempleo se

han convertido en una enfermedad crónica. Más allá de su fuerza disciplinaria al obligar a la aceptación de salarios reducidos, la informalidad hace superflua a buena parte de la población trabajadora, la segrega del segmento moderno de la economía con daño a la competitividad económica.

En México, la exclusión alcanza escala inusitada: la distribución del ingreso lejos de aliviarse ha reiniciado el proceso de concentración (Gini de 0.50), los pobres suman cerca del 50% de la población, los trabajadores informales forman el 49% del empleo total. Al menos la mitad de la población no parece tener voz e influencia alguna en el diseño de las políticas públicas a la luz de la desprotección crónica de sus intereses vitales. Por eso, la economía mexicana ha entrado en una fase de cuasi-estancamiento que ya se prolonga un cuarto de siglo. Entre 1950 y 1980, el producto se expandió a razón del 6% anual y sólo a la mitad de esa cifra entre ese último año y 2008, además de haberse acrecentado considerablemente sus altibajos. Superar tal situación obliga a reflexionar sobre las agarraderas de un futuro esfuerzo desarrollista que, además, sirva para paliar los efectos de la crisis financiera global.

Como primer cambio estratégico habría que acomodar a los principales objetivos nacionales, buscando las combinaciones más apropiadas. Lograr un nivel razonable de la estabilidad de precios, no debiera estar reñido con metas de crecimiento, con el demérito de la competitividad externa, ni con la contracción del empleo interno. En sí mismo, el mercado es notoriamente inadecuado a la tarea de definir las metas colectivas y de generar bienes públicos. El Estado tendrá que intervenir para llenar esas funciones, así como las de cuidar de los intereses nacionales en un mundo pleno de incertidumbres. En consecuencia, habrá que reconfigurar las fronteras entre Estado y mercado, con el propósito medular de impedir la erosión ulterior de la capacidad de acción del gobierno y del mismo sistema democrático nacional.

Sacar ventaja de la integración de los mercados mundiales supone avanzar en las redes transnacionales de producción y comercio. Habrá que ganar posiciones en la elaboración de bienes de mayor valor agregado y contenido tecnológico, de alta elasticidad e ingreso de la demanda universal, negociando

mejores acuerdos y resultados. De otro lado, como lo ha demostrado la historia, los principales alicientes a la inversión foránea, a la incorporación de tecnologías y a la mejora de la inserción en la economía mundial, se asocian a mercados nacionales en expansión, a gobiernos activistas que impulsan decididamente el desarrollo. Por contra, los países que se limitan a ofrecer pasivamente concesiones, sean fiscales, salariales, desregulatorias que dependen del funcionamiento mecánico de los mercados, por regla general, arrojan los peores resultados en el mundo. Por eso, la apreciación casi sistemática del tipo de cambio al reducir los precios de las importaciones, ciertamente contribuye a apaciguar la inflación, pero, al propio tiempo, reduce innecesariamente la competitividad de los productores nacionales, los alicientes a la inversión, desorganiza los encadenamientos industriales y acentúa los desajustes de pagos.

En otra vertiente, habría que elevar y alentar la inversión, incluyendo a la formación pública de capital que, aparte de reconocer enormes rezagos, es indispensable para generar economías externas a las empresas, además de compensar la caída crítica del empleo. México necesita instrumentar reformas fiscales, políticas contracíclicas efectivas y utilizar de mejor manera los grados de libertad del presupuesto y del endeudamiento públicos, tanto como eliminar obstáculos al crédito bancario interno a la producción.

Los propósitos precedentes exigen de la implantación decidida de políticas industriales, mediante los cuales no sólo se atiendan las señales de mercado, sino se haga selección deliberada de algunas actividades a fomentar, sea en términos del desarrollo del comercio exterior o de completar estratégicamente el entramado del tejido productivo interno. Aquí la reconstrucción de la banca de desarrollo tendrá un papel importantísimo a desempeñar.

Sin duda, el país necesita de una reforma laboral para responder a las exigencias de los mercados liberados. Pero eso no supone, inhibir la negociación colectiva, infringir derechos adquiridos o atentar contra la libertad sindical. Supone, en cambio, modernizar los derechos de los trabajadores para brindarles protección en las inciertas condiciones económicas de la actualidad, comenzando

por la implantación urgente de una política activa de empleo, con ingredientes complementarios como el de evitar la depreciación secular de los salarios, instaurar el seguro del desempleo o brindar accesos universales a los servicios de salud.

Cabe notar que muchos de los márgenes de resistencia de la sociedad mexicana están próximos a desaparecer. El sector informal ya está saturado, difícilmente podría absorber más trabajadores, sin encausarlos hacia actividades delictivas. De la misma manera, la competitividad no podría seguir fincándose en la contracción de los salarios reales o en cargas impositivas reducidas que comprimen al mercado interno. Como hacen los países nórdicos de Europa, toca el turno a los empresarios a innovar, incorporar tecnologías avanzadas, reducir costos distintos a los de la depreciación salarial.

Encarar nuestras dificultades y las condiciones creadas por la crisis global, exige de un alto grado de flexibilidad y pragmatismo en las políticas públicas. Sin duda, en el corto y mediano plazo, las tasas de crecimiento del mundo serán más moderadas, la apertura comercial de los países resultará en algún grado disminuida, el financiamiento externo se reducirá y elevará sus costos, los contagios de inestabilidades podrán ser más frecuentes y serios, como el caso de Grecia y de la Unión Europea. Ello se suma a las dislocaciones de fondo que aquejan al mundo: el calentamiento global, la transformación de las bases energéticas, el envejecimiento demográfico, la transferencia masiva de las capacidades productivas de Occidente a China y otros países asiáticos. Por todo eso, más que nunca la construcción del futuro depende de nuestras propias fuerzas.